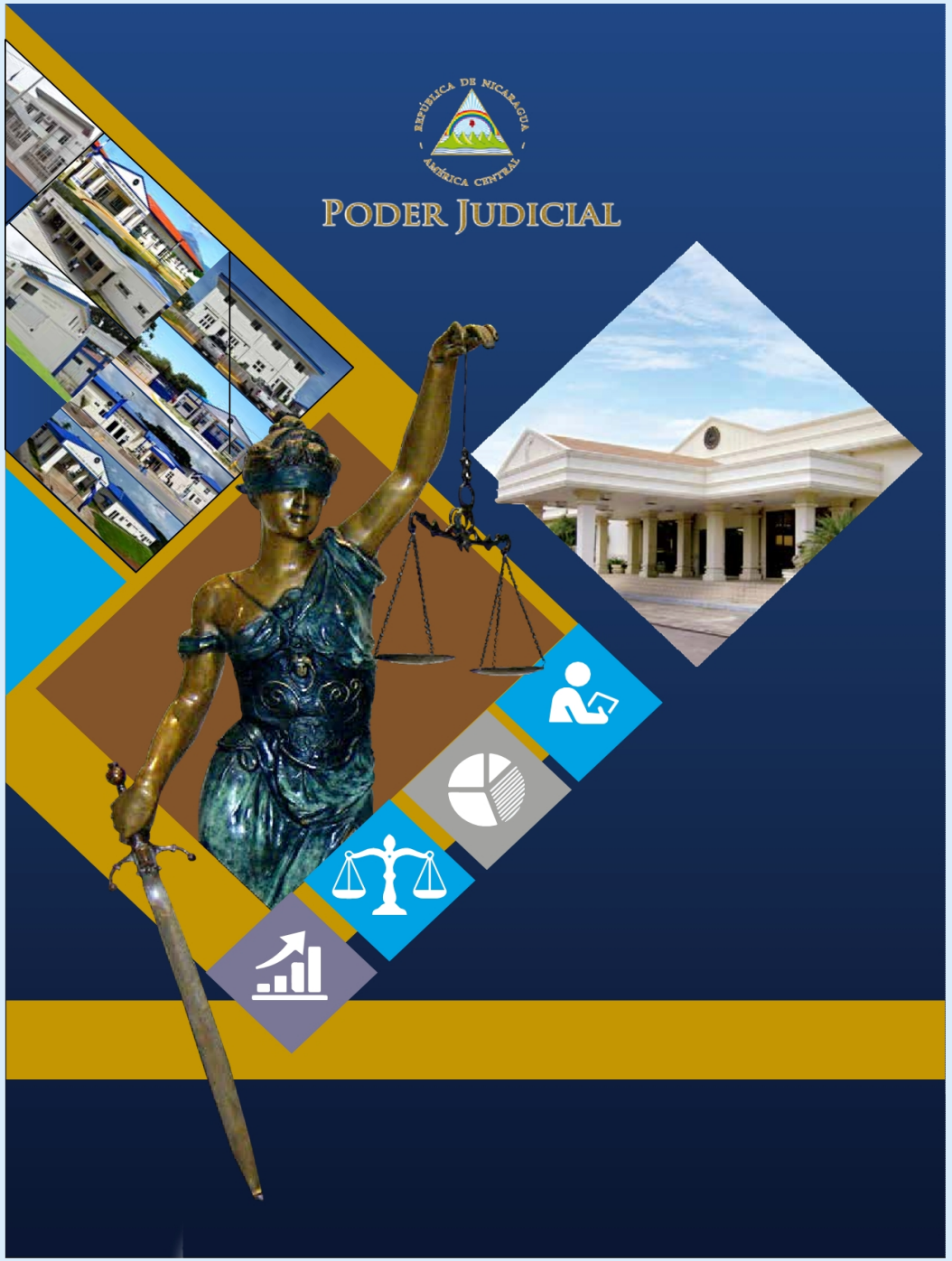


El Poder Judicial Sirviendo a Nuestro Pueblo

Por una administración de justicia más humana, asequible, transparente, moderna y tecnológicamente desarrollada

Los esfuerzos que está llevando adelante el Poder Judicial para avanzar en su modernización y profesionalización, están debidamente organizados en nuestro **Plan Estratégico Decenal 2012- 2021,** el cual está en correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo Humano del Gobierno de la República**.**

Eje No.1: "**Continuar Reduciendo la Retardación de Justicia**":

Para lograr este objetivo, se han introducido nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la tramitación de los juicios, a través de un nuevo Modelo de Gestión de Despachos Judiciales, que empezó a funcionar desde el año 2007, orientado a lograr que las causas sean evacuadas de forma más eficiente, accesible y transparente, mediante la implementación de técnicas de gestión de organización pública, que relevan a las juezas y jueces de labores administrativas; permitiéndoles concentrarse en su función jurisdiccional y creando mecanismos dinámicos y de fácil acceso a la población para la resolución de litigios.

A través de su plataforma informática, llamada SISTEMA NICARAO, el modelo de gestión facilita la consulta del expediente en línea para todas las partes procesales, evita el contacto directo entre las partes y los jueces, lo que brinda mayor transparencia en la tramitación de las causas judiciales; y hasta posibilita realizar notificaciones electrónicas. Este modelo contiene mecanismos de trabajo que consisten en oficinas de servicios comunes para todos los juzgados de una misma materia y nivel jerárquico, que son Oficinas de Apoyo Judicial (Oficinas de Recepción y Distribución de Causas y Escritos; Oficinas de Notificaciones; Oficinas de Gestión de Audiencias, Oficinas de Atención al Público, etc.) y las Oficinas de Apoyo Procesal (oficinas de tramitación).



Eje Estratégico 2, que persigue fomentar una mayor imparcialidad del Poder Judicial.

Este lineamiento está muy ligado a la reforma normativa impulsada por la Corte Suprema de Justicia.

Esta reforma procesal inició en el año 2002 con la incorporación de la oralidad **en materia penal**, **y en la última década se extendió hacia lo laboral, familia y, más recientemente a la materia civil;** brindando mayor acceso a la población nicaragüense y transparentando los procesos, pues ahora todos los juicios son orales y públicos, regidos por principios como la inmediación, concentración, publicidad y celeridad.

Los beneficios de esa correcta mixtura entre un modelo de gestión de despachos moderno y automatizado con un sistema procesal oral, célere y garantista, se refleja en las estadísticas, pues en el **año 2017**, cuando entró en vigencia el nuevo Código Procesal Civil, esta materia alcanzó los mayores **índices de resolución**, con un **166.5%**. **Ese año ingresaron al sistema 26,891** casos y **se resolvieron 44,785, incluyendo 17,894 del rezago heredados del antiguo procedimiento escrito**. En el último año informado en la Memoria del Poder Judicial, la materia civil también obtuvo los mejores resultados, con **158.4% de causas resueltas**; en dicho período **ingresaron 25,643** casos y **se resolvieron 40,631**, **incluyendo 14,988 de la pendencia**.



Otro componente fundamental de este eje es la capacitación constante, a través del **Instituto de Altos Estudios Judiciales.**

En los últimos 2 años se desarrollaron **721 actividades de capacitación**, en las que participaron **25,374 funcionarios y funcionarias del sistema de justicia**, sobre una amplia gama de temas jurídicos, desde la prevención de la violencia, género y desarrollo humano, métodos de resolución alterna de conflictos, narcotráfico, crimen organizado, trata de personas y lavado de activos, hasta las actividades formativas para la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil. Así como la tercera edición del Magíster en Derecho y Desarrollo Humano desde la Perspectiva de Género.





Otro tema toral para el avance en la profesionalización del Poder Judicial **es la plena aplicación de la Ley de Carrera Judicia**l, que ordena organizar los concursos de oposición para optar a los cargos jurisdiccionales, no sólo de jueces o magistrados, sino, secretarios de actuaciones, defensores públicos y demás; así como las evaluaciones al desempeño que permitan promover a los mejores servidores y servidoras, al tiempo de sancionar, democionar o destituir, según corresponda, a quienes tengan resultados deficientes.

En el año 2017 el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial evaluó el desempeño para la **reelección de 32 magistrados de Tribunales de Apelaciones** con períodos vencidos. El 3 noviembre de 2017, el CNACJ convocó mediante acuerdo a proceso interno para optar dentro del escalafón de Carrera Judicial a **10 plazas vacantes de Magistrados de Tribunales de Apelaciones**; aplicando en todos los casos criterios objetivos, claramente definidos en la Ley de Carrera Judicial, con lo cual se contribuye a la estabilidad en los cargos, que ha sido una prioridad d el Poder Judicial.





El **Eje estratégico No. 3: Garantizando la Seguridad Jurídica** contempla temas tan importantes como los avances en materia de los Registros Públicos, tanto de la Propiedad Inmueble como Mercantiles, que son fundamentales para el desarrollo económico y social del país.

Entre el 2010 y 2019, se mejoró la infraestructura física e informática de los Registros de Chinandega, Managua, Masaya, Jinotega, Rivas, Matagalpa, Boaco, Río San Juan, Estelí y Carazo.

Entre los últimos 2 años, en las 17 oficinas registrales del país se brindaron **569,898 servicios**, de los cuales 257,351 corresponden a inscripciones y 312,547 a emisión de certificaciones.

El Sistema de Información Integrado Catastro–Registro (SIICAR), se está aplicando plenamente en los Registros de Chinandega, Managua y Estelí, en tanto, se está iniciando a replicar en el Registro de León y se planea iniciar la réplica también para este año, en el Registro de Madriz, Nueva Segovia. El SIICAR automatiza y simplifica los procesos; digitalizando la información y transparentando la prestación de los servicios registrales, al tiempo que mejora sustancialmente los tiempos de respuesta para la población usuaria, pero lo más importante es que fortalece la seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra, que es uno de los principales retos en nuestro país.





También, dentro de este lineamiento están incluidos otros aspectos de gran relevancia, como son los referidos a los procesos de incorporación de abogados y notarios, al igual que los procesos disciplinarios que se llevan en contra de los profesionales del Derecho y en contra de funcionarios judiciales, por faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones.

Se crearon Inspectorías en las 9 circunscripciones Judiciales del país;

En la nueva oficina de Atención al Público de la Inspectoría Judicial en la CSJ, **fueron atendidas 11,596 personas**; a 110 usuarios se les elaboró acta de queja, por ser la mayoría de ellos de escasos recursos, que no les permite contratar un abogado que les represente; dándoles así mayor acceso a la justicia.

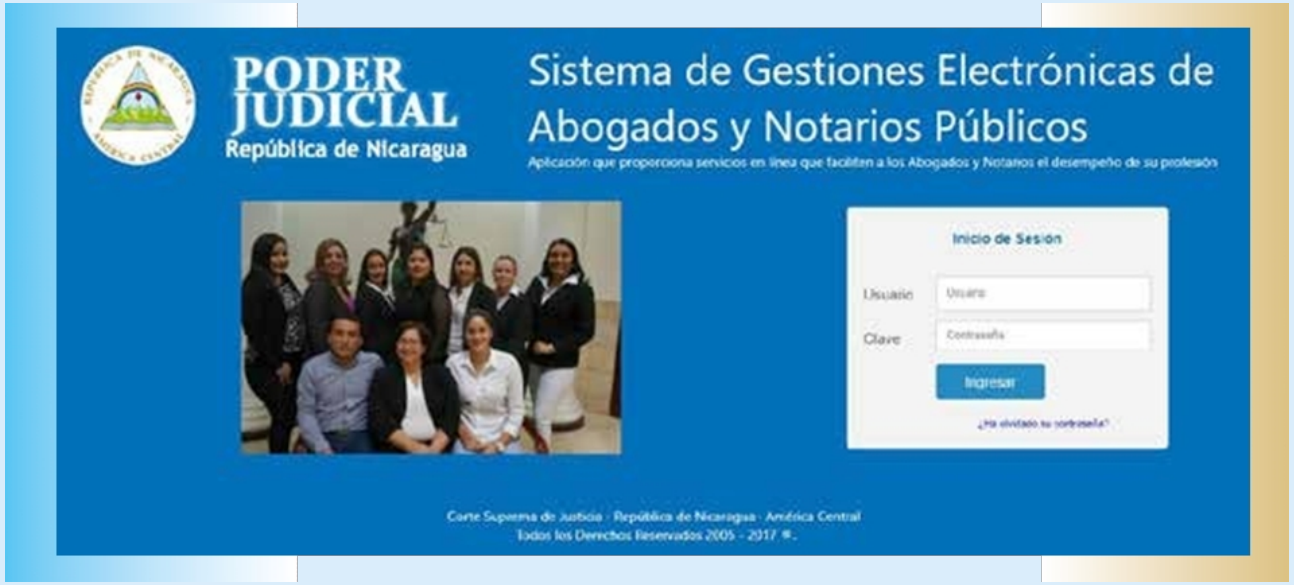
Se está concluyendo con el desarrollo de una herramienta informática para el trámite de “Presentación de Quejas en Línea a Funcionarios Judiciales y/o Abogados y Notarios Públicos”, Con la implementación de este servicio en línea se obtienen los siguientes beneficios:

- La reducción de uso de papel.
- Ahorro de tiempo y recursos para la persona
- Acceso para presentar quejas las 24 horas, los 365 días del año, siempre que se cuente con un medio electrónico con acceso al Portal Web del Poder Judicial.
- Monitoreo por correo electrónico del avance de la queja presentada.

La Dirección General de Registro y Control de Abogados y Notarios Públicos, también ha incorporado herramientas informáticas para brindar mayor transparencia a la información que se registra de los profesionales del derecho y brindar mayor seguridad jurídica a la población usuaria de sus servicios. Tal es el caso del Sistema de Gestiones Electrónicas de Abogados y Notarios, que permite mecanismos de comunicación más ágiles y efectivos entre éstos y la Corte Suprema de Justicia.

Esta herramienta se encuentra disponible en la página web del Poder Judicial y cuenta con 3 módulos: el primero, para la actualización de información de los abogados y notarios; el segundo para el envío de los índices notariales y, el tercero, para realizar solicitudes a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, relacionadas con el ejercicio profesional.





En los últimos 2 años se registraron a través de esta plataforma 29,662 abogados y notarios públicos.

El eje estratégico número 4 que consiste en seguir facilitando el acceso a la justicia para la ciudadanía, desde las personas más humildes y pertenecientes a sectores vulnerables, hasta la tutela judicial efectiva para los inversionistas nacionales y extranjeros.

Así, por ejemplo, en el último periodo, la Defensoría Pública brindó 241,594 servicios (en materia penal, civil, de familia y laboral a personas de escasos recursos); atendiendo 100,106 causas, de ellas 53,471 penales y 46,635 de familia y otras materias. Como resultado de la atención en materia de familia, se restituyeron derechos a 24,449 niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, por un monto de C$124 millones 753,401.64 Córdobas, que equivalen a unos 3 millones cuatrocientos ocho mil dólares.



Jurisdiccionales	100,106
Penal	53,471
Familia y otras Materias	46,635
No Jurisdiccionales	141,488
Mediaciones	4,960
Notarías	4,960
Asesorías	131,568

El Plan Estratégico del Poder Judicial, también nos manda a promover y fortalecer los métodos de resolución alterna de conflictos, para construir una “Cultura de Paz”, orientada a edificar relaciones sociales basadas en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo.

El servicio de mediación brindado por la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos dio como resultado que en el último año se recibieran 29,039 solicitudes, efectuándose 6,115 mediaciones, de las cuales 3,969 finalizaron con acuerdos.

El Servicio de Facilitadores Judiciales, que es un mecanismo de participación popular en la administración de justicia, tiene presencia en los 153 municipios del país; a través 4,981 facilitadoras (es). Que en los últimos 2 años brindaron más de 321,688 servicios a la población, entre mediaciones, charlas, asesoramientos, remisiones de casos y acuerdos extrajudiciales.







Por otra parte**, el Instituto de Medicina Legal** se ha convertido en un aliado estratégico para el sistema de administración de justicia y, en particular, de la lucha contra la Violencia de Género. **En el último período se transfirieron 200 mujeres víctimas de violencia** a instituciones del sector salud, social y protección: 29 niñas y adolescentes, 123 mujeres de 18 a 35 años de edad y 48 de 36 a 60.

En el año 2017 se concluyó la construcción y equipamiento del nuevo edificio para los laboratorios de Toxicología, Serología y ADN del Instituto de Medicina Legal. Se trata de un edificio moderno, construido conforme estándares internacionales, que garantizan transparencia, calidad, seguridad analítica y rapidez.

En su sede central y las 27 delegaciones en todo el país, **en el último año se realizaron 71,868 peritaciones y 2,283 análisis en matrices biológicas recolectadas a personas fallecidas y vivas**, para determinar drogas de abuso, alcohol, psicofármacos y otros medicamentos.



Peritaciones	Sexo		TOTAL	%
	Masculino	Femenino		
Lesiones Físicas	16,542	9,876	26,418	40.6
Lesiones Psíquicas	1,820	12,721	14,541	22.3
Estado de Salud	9,023	824	9,847	15.1
Violencia Intrafamiliar	1,450	6,329	7,779	11.9
Violencia Sexual	557	3,563	4,120	6.3
Peligrosidad	923	29	952	1.5
Estado de Salud Mental	457	184	641	1.0
Edad Biológica	319	144	463	0.7
Tutela	155	193	348	0.5
Credibilidad	2	7	9	0.0
TOTAL	31,248	33,870	65,118	100
PORCENTAJE	48.0	52.0	100	

Un elemento primordial en el Eje de Facilitación del Acceso a la Justicia, ha sido la incorporación de la perspectiva de género, que ha hecho el Poder Judicial, para promover la igualdad de género en la justicia.

En la última década ha implementado medidas que contribuyen con la protección de derechos de las mujeres, tales como:

La creación de la Comisión de Género de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, que es responsable de impulsar la transversalización de la perspectiva de género mediante la creación de la Política Institucional de Género para Proteger y tutelar, el goce y disfrute de los derechos humanos establecidos en la legislación nacional e internacional para las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Se participó activamente en la creación de la Ley 779, “Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer”, la cual incorpora los tipos penales establecidos en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Belem Do Para”. A partir de la aprobación de esta ley, se crearon Juzgados Especializados en Violencia, con jueces seleccionados a través de concursos de oposición.

Se han elaborado normas y protocolos de actuación para los equipos interdisciplinarios adscritos a los juzgados especializados en materia de Familia y Violencia contra la Mujer, con el fin de evitar la revictimización y facilitar la aplicación coherente de la Constitución, Tratados y Doctrina en los casos de violencia.

Se han capacitado a 107 jueces y juezas, magistrados y magistradas especializados, quienes han recibido un magíster en Derecho y Desarrollo Humano Desde la Perspectiva de Género, que ha sido impartido en 3 ediciones, con el apoyo del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de España.



Con el apoyo de UNICEF, se elaboraron tres instrumentos de suma importancia para mejorar la administración de justicia a favor de niños, niñas y adolescentes, estos son: el Protocolo Estandarizado de Actuación Judicial para procesos penales en delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes; el Protocolo Estandarizado Sobre abordaje integral y valoración médico legal para casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual; el Protocolo Estandarizado De la Defensora y Defensor Público Especializado de Atención Integral para Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de delitos, especialmente de Violencia Sexual.

UNICEF también ha contribuido técnica y financieramente con la formación especializada del personal jurisdiccional y administrativo, a través de cursos, diplomados y talleres para casi 800 funcionarios y funcionarias, que recibieron talleres de prevención de violencia contra la niñez y adolescencia; de esta forma podemos decir con satisfacción que el Poder Judicial privilegia en su transformación no sólo la oralidad procesal, la tecnología o la infraestructura judicial, sino también la gestión del talento humano, lo que permite que las actuaciones judiciales se rijan bajo los estándares internacionales que garantizan la protección de los Derechos Humanos.







Otro de los Ejes fundamentales de nuestro Plan Estratégico, es el relativo a la Coordinación Interinstitucional. Nicaragua es un referente regional en este aspecto. La coordinación entre las distintas instituciones del sistema de justicia inició con el combate al narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de dinero. A partir de ahí se expandió para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes; así como al ámbito de Familia, Registral y laboral.

Asimismo, existe una coordinación con Cancillería y otras instituciones del Estado, en la elaboración de los informes técnicos sobre el cumplimiento de los convenios y tratados internacionales de los que Nicaragua es parte.

Esta coordinación se extiende a la participación activa en foros internacionales como el **Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe** y la **Cumbre Judicial Iberoamericana**, de donde emanan productos encaminados a modernizar y transparentar la función jurisdiccional.







Finalmente, está el Eje Estratégico orientado a Mejorar la Gestión Administrativa del Poder Judicial para facilitar la función jurisdiccional. Desde el año 2010, se ha puesto especial énfasis en la modernización institucional; partiendo de una eficiente y transparente gestión administrativa, donde los recursos se priorizan hacia la función jurisdiccional, que es la razón de ser del Poder Judicial y para facilitar a la población el acceso a la justicia.

Entre el año 2011 y el año 2019, se han invertido más de 42 millones de Dólares, en la construcción de 19 complejos judiciales departamentales y municipales, 8 Casas de Justicia e instituciones auxiliares del Poder Judicial, sin mencionar las millonarias inversiones en computadoras, programas informáticos, mobiliarios, equipos de oficina, vehículos y tantos otros elementos que están transformando por completo la forma como la ciudadanía accede a los servicios de justicia. En lo que va del año, se ha iniciado la construcción de la Casa de Justicia de San Juan del Sur, el Complejo Judicial de Siuna, la ampliación del Complejo Judicial y el Registro de Bluefields, así como también se está licitando la construcción del Complejo Judicial de Masatepe y los Registros de Estelí y Masaya.





EN CONCLUSIÓN:

El Poder Judicial de la República de Nicaragua ha ejecutado una serie de planes estratégicos para modernizar la prestación del servicio público de administración de justicia; con acciones encaminadas a hacerla más asequible, eficiente, transparente y garantista. El más reciente de esos esfuerzos organizados es el Plan Estratégico Decenal 2012- 2021.

En los últimos 10 años, el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia, ha logrado una profunda transformación en infraestructura física, incorporación de herramientas tecnológicas y adquisición de equipos informáticos para la función jurisdiccional, que tienen su máxima expresión en el continuo proceso de réplicas del Modelo de Gestión de Despachos Judiciales, que junto a la entrada en vigencia de nuevos Códigos Procesales Orales en todas las materias, están permitiendo avanzar en las metas trazadas.

Sin lugar a dudas, aún hay muchos retos por delante, pues, la construcción de una justicia recta, eficiente, transparente y asequible para la población es un proceso dinámico, que jamás puede tenerse como un producto terminado, siempre hay cosas por hacer, aspectos por mejorar; donde lo importante es no caer en la inercia, sino que tener planes de acción, con metas claramente definidas y sistemas de medición de resultados, que permitan avanzar en la consecución de los objetivos trazados, en beneficio de nuestra ciudadanía, a la que nos debemos.

¡Muchas gracias!